

Roj: AAP M 4102/2005
Id Cendoj: 28079370142005200060
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 14
Nº de Recurso: 375/2004
Nº de Resolución: 101/2005
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: AMPARO CAMAZON LINACERO
Tipo de Resolución: Auto

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 14

MADRID

AUTO: 00101/2005

Rollo: RECURSO DE APELACION 375 /2004

AUTO

Ilmos. Sres. Magistrados:

AMPARO CAMAZON LINACERO

JUAN UCEDA OJEDA

PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

En MADRID , a diecisiete de mayo de dos mil cinco .

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID , los Autos de JURA DE CUENTAS 939 /2003 , procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 54 de MADRID , a los que ha correspondido el Rollo 375 /2004 , en los que aparece como parte apelante A.E.A.D.E (ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE DE DERECHO Y EQUIDAD) Y "MAHICA TELEFONIA S.L" representado por el procurador DOÑA LUCIA CARAZO GALLO, y como apelado DON Luis Andrés , quien formuló oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó actuando en su propio nombre y representación, sobre **jura de cuenta**, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. DOÑA AMPARO CAMAZON LINACERO.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid, en fecha 27 de febrero de 2004 se dictó auto , cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "SE DECIDE: Desestimar la impugnación de la demanda de la diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2003, la que se confirma en todos sus extremo."

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte apelante A.E.A.D.E ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE DE DERECHO Y EQUIDAD) Y "MAHICA TELEFONIA S.L", al que se opuso la parte apelada DON Luis Andrés , y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los *artículos 457 y siguientes de la LEC* , se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 10 de mayo de 2005.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Promovida **jura de cuentas** por el Procurador don Luis Andrés los poderdantes se opusieron al requerimiento de pago, dictándose auto que estimó la oposición y condenó al promotor al pago

de las **costas**. Los beneficiarios de la condena en **costas** instaron la práctica de su **tasación** con inclusión de los honorarios de letrado y derechos de procurador y denegada por no ser preceptiva la intervención de dichos profesionales en el procedimiento de **jura de cuentas** impugnaron la **denegación**. El juzgado dictó auto desestimando la impugnación y contra dicho auto interpone recurso de apelación la parte impugnante alegando que la intervención de abogado y procurador es preceptiva y ha de procederse a la práctica de la **tasación** de **costas** incluyéndose el importe de la minuta y **cuenta** aportada.

SEGUNDO.- La resolución de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 3ª, de 2 de junio de 2003 sostiene que en el procedimiento de **jura de cuentas** previsto en el *artículo 34 de la Ley de Enjuiciamiento civil* no es preceptiva la intervención de letrado, de acuerdo con la propia literalidad del su párrafo primero, en el que se establece que "cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, presentará ante el tribunal en que éste radicare **cuenta** detallada y justificada" y la doctrina contenida en la vieja sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1903 que, en relación con el *artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881*, así declaró la innecesariedad de letrado.

La resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 4ª, de 1 de junio de 2004, en similar sentido a la anterior, en supuesto de reclamación del letrado de su minuta, expresa que "(...) la dirección de letrado es obligatoria para los litigantes, salvo los supuestos excepcionados en el *artículo 31.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil*, entre los que no se contempla el que nos ocupa de **cuentas** del procurador o minuta de honorarios del letrado, pero no para los procuradores ni los letrados, que no tienen aquél carácter cuando con arreglo a los *artículos 34 y 35 de la vigente Ley de Enjuiciamiento civil* presentan **cuentas** detallada y justificada contra su poderdante moroso, manifestando debidas y no pagadas las cantidades reclamadas, o minuta detallada de honorarios frente a la parte que defienden los abogados, para que paguen dichas sumas con las **costas**. Procedimientos en los que no es preceptiva la intervención de abogado. Tratándose de los honorarios de abogado la legitimación activa para ejercitar la acción ejecutiva contemplada en el *artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento civil* corresponde exclusivamente al abogado ligado con la parte por vínculo contractual, por ser el procedimiento personalísimo. No siendo preceptiva la intervención letrada no cabe esgrimir discriminación de estos profesionales con respecto a los demás ciudadanos, que desde luego no cuentan con este procedimiento privilegiado de ejecución, para obtener el cobro de los honorarios devengados en el pleito. Esta Sala por tanto suscribe la declaración de improcedencia de incluir los honorarios del letrado en la **tasación** de **costas** del incidente de **jura de cuentas**, dado que no es preceptivo que la reclamación de su minuta de honorarios esté firmada por letrado y la condición de letrado es precisamente lo que le otorga legitimación activa (la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1903 se refiere a los procuradores pero su contenido es extrapolable a los letrados), realizada por el iudex a quo (...). Objeta, finalmente, el letrado apelante que entonces quedaría sin contenido la referencia expresa a las **costas** que hace el *artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento civil*, sin embargo ello no es así porque puede haber supuestos en que haya **costas** como cuando conforme a lo dispuesto en el *artículo 32.4 de la Ley de Enjuiciamiento civil*, no siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador se valga de dichos profesionales y el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado o que el domicilio del representado o defendido estuviera en lugar distinto a aquel en que se haya tramitado el juicio".

Por último, la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección 2ª, de 2 de diciembre de 2002, razona "es admitido por ambas partes que en la **jura de cuentas** no es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, posición que ya puso de manifiesto nuestro Tribunal Supremo en su vieja y conocida sentencia de 1 de abril de 1903. Y es que en nuestro ordenamiento jurídico - *Ley de Enjuiciamiento civil de 1881*- se regulaba el procedimiento de *jura de cuentas* -*artículos 7, 8 y 12* - cuya constitucionalidad ya fue sostenida por el Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de 25 de marzo de 1993, cuya peculiaridad se plasmaba en que no producía el efecto de cosa juzgada material y en que su sumariedad no impedía mecanismos de defensa ejercitables en la oposición para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que la propia jurisprudencia señaló y tasó, siendo: el pago o prescripción, que los honorarios no se hubieran devengado en el pleito, así como, en su caso su impugnación por excesivos, no comprendiéndose una impugnación amplia de honorarios por indebidos (sentencias del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, de 27 de enero y 10 de febrero de 1997). Este procedimiento, de naturaleza ejecutiva, permitía al Letrado que hubiera intervenido en un procedimiento, de manera privilegiada, hacer efectivo el crédito generado a su favor por su actuación profesional, evitándole acudir al procedimiento ordinario correspondiente. Junto a los motivos de oposición señalados existían, obviamente, los de falta de legitimación (circunscrito al Letrado y al Procurador en lo referente a que hayan intervenido en el asunto y representado a la parte en el litigio) y de competencia (limitada al Juzgado que haya conocido del pleito donde los honorarios se devengaron).

Cuando había oposición, como ocurría en la impugnación de la **tasación de costas** por partidas indebidas, el artículo 429 de la antigua Ley de Enjuiciar efectuaba una remisión en cuanto al trámite y recursos al de los incidentes, sin que ello, como bien dice la Juzgadora a quo, llevara a alterar las normas de postulación en el procedimiento principal del que dimanaba y sería ilógico e incongruente que no se exigiera la asistencia de Letrado y Procurador por no ser preceptivo en el principal y sí por el contrario en el incidente derivado".

Esta misma Sala, en auto de fecha 20 de enero de 2003, rollo 225.01 , argumentó "siguiendo en lo necesario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de abril de 2002 y a la sentencia de esta Sala de 30 de enero de 2002 , cabe decir que la idea de **costas** responde a una compensación por ciertos gastos individualizados, no todos, causados por el proceso. La idea de gasto compensable es conceptualmente anterior a la imputación del mismo a una de las partes. Al mismo tiempo la condena en **costas** no es sino la traslación a la parte contraria de aquellos concretos gastos, ocasionados por el proceso a la que resulta beneficiada por la condena. Mas esa traslación sólo es adecuada si aquellos gastos individualizados son reales y preexistentes, sin que se estime adecuado que sea la propia condena, la que genere el derecho a unos honorarios, que sin ella no hubieran tenido posibilidad de existencia. La condena en **costas** presupone la existencia previa de éstas, pero no es su título generador. Resulta necesario determinar si es preceptiva o no la intervención de abogado para instar la tramitación del procedimiento de **jura de cuentas**, pues si no fuere así, ni los honorarios del letrado que se autodefende, ni los del letrado que por el letrado promotor interviene podrán incluirse en la **tasación de costas**. En los artículos 7, 8 y 12 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil se regula un especial procedimiento exclusivamente previsto para que procuradores y abogados obtengan de su respectivo poderdante y patrocinado los fondos necesarios para el pago de los gastos, suplidos, derechos y honorarios causados por su actividad profesional en un determinado proceso. Este proceso llamado "de **cuenta jurada**" o "de **jura de cuentas**", es un procedimiento atípico, peculiar y privilegiado proceso de ejecución -como reconocieron las SSTs, Sala 1ª, de 7 de diciembre de 1932 y 20 de noviembre de 1967 -, y en este sentido, no es un proceso al que los procuradores y abogados deban acudir de modo necesario para exigir las cantidades que se les adeudan. Tienen, como siempre, a su disposición si lo desean, el juicio declarativo ordinario que corresponda a la cuantía de la reclamación. Por otro lado, es razonable que pueda el legislador establecer mecanismos de reclamación distintos del juicio declarativo ordinario cuando sea diferente la situación en que se encuentren los acreedores respecto de sus deudores, bien por razón del título justificativo del crédito o debido a otras circunstancias concurrentes en los diferentes casos que pueden presentarse y que justifiquen un tratamiento especial, (STC 110/1993, de 25 de marzo), pues se trata de una prerrogativa a la que, como tal, éstos pueden renunciar. (...). El procedimiento de "**jura de cuentas**" es bastante singular y aunque ha sido declarado constitucional por la STC 110/1993, de 25 de marzo , se reconoció la necesidad de un mayor desarrollo procedimental dada la parquedad de su regulación. El título ejecutivo es diverso en función de que se trate de obtener una provisión de fondos (artículo 7 LEC de 1881), de cobrar derechos o suplidos (artículo 8 LEC de 1881) o de cobrar honorarios de abogado (artículo 12 LEC de 1881). Así las cosas, ha de partirse de la consideración de que los artículos 8 y 12 constituyen un procedimiento especialísimo que escapa a la regulación que, en cuanto a la necesidad de postulación y defensa, se disciplina en los artículos 3, 4 y 10 de la anterior Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 , y la conclusión sobre la necesidad de postulación hay que deducirla de los artículos 8 y 12 de dicha Ley ; es decir, que si el procurador puede, por sí mismo, promover la **jura de cuentas** de su poderdante, sin necesidad de dirección letrada (artículo 8), y si el abogado puede reclamar al procurador o directamente a la parte (artículo 12), sin necesidad de la dirección por parte de otro letrado, ni la postulación de un procurador distinto del requerido de pago, es evidente que la actuación de estos u otros profesionales por los mismos en los procedimientos de **jura de cuentas** no responde a la necesidad de postulación y defensa procesal, pues existe el privilegio de actuar directamente. La conclusión por consiguiente es que no se puede pretender incluir los honorarios profesionales del letrado que se autodefendió, como tampoco lo serían los del letrado que actuó en defensa del letrado promotor de la **jura de cuentas**, en la **tasación de costas** generadas en la presente apelación, por no ser preceptiva la intervención de abogado y procurador en la primera instancia, ni en esta alzada. En la misma línea interpretativa, se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 2 de febrero de 1995 , pero ceñida al caso del procurador señalando que "de la propia naturaleza de la **jura de cuentas** dimanante de lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley de Enjuiciamiento civil (1881), si el letrado está facultado para reclamar del procurador, representante de la parte a quien defendió, el pago de los honorarios correspondientes por su actuación profesional en el litigio, dicha reclamación no ha de hacerse a través de otro procurador, estableciendo una especie de relación jurídico procesal distinta que carece de encaje legal, por lo que ha de resolverse en el sentido de no ser procedente la inclusión de tales derechos en la **tasación de costas** practicada." Esta misma conclusión es a la que llegó el Tribunal Supremo en una antigua sentencia, en la que se concluía que no se precisa abogado para la tramitación de la **jura de**

cuentas, lo que supone que, si interviniera, las **costas** que devengue no podrán incluirse en la condena de la tramitación (STS de 1 de abril de 1903)".

A la vista de lo expuesto, esta Sala no puede sino confirmar el auto recurrido, que ratifica la improcedencia de practicar la **tasación** de **costas**, instada por los poderdantes beneficiarios de la condena en **costas** con el fin de incluir los derechos del procurador y minuta del letrado, por no ser preceptiva la intervención de dichos profesionales, ya que la misma doctrina recogida en torno a los *artículos 8 y 12 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881* es aplicable al supuesto de los *artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento civil vigente*, en la materia aquí controvertida, pues tampoco los *artículos 4 y 10 de la anterior ley procesal* excluían expresamente de la intervención de procurador y letrado la **jura** de **cuentas** y en el artículo 4 también se hacía referencia a las **costas** y, a pesar de ello, mayoritariamente se aceptó que no era preceptiva la intervención de letrado y procurador en los procesos de **jura** de **cuentas** del letrado al procurador o a la parte, según el supuesto, y del procurador a su poderdante moroso. Obviamente, lo que no se exige al promotor de la reclamación de la **cuenta** o de la minuta no puede exigirse al poderdante o parte que se opone al requerimiento de pago, porque la innecesariedad de los profesionales, en el sentido expuesto se predica de la **jura** de **cuentas**.

TERCERO.- El recurso de apelación ha de ser desestimado. A pesar de la desestimación no procede hacer expresa imposición de las **costas** causadas en esta alzada por dicho recurso dadas las dudas de derecho que plantea el supuesto analizado, dudas que se ponen de relieve por la literalidad de los *artículos 34, 35, 31 y 23 de la Ley de Enjuiciamiento civil*.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA.- DESESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por A.E.A.D.E., y Mahica Telefonía S.L., representada por el Procurador doña Lucia Carazo Gallo, contra el auto dictado en fecha 27 de febrero de 2004 por el Juzgado de Primera Instancia número 54 de los de Madrid (jura de cuentas 939/03) y CONFIRMAR dicha resolución, sin hacer expresa imposición de las **costas** causadas en esta alzada.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del *artículo 248.4 de la LOPJ*.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.